

CATALIZADORES DEL BIENESTAR SOCIAL. INSTITUCIONES INCLUSIVAS Y ESTADO EMPRENDEDOR EN LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO

Autores: Maximiliano Campos Ríos

Fuente: Revista de Economía Política de Buenos Aires, Vol. 30, Año 19,
(Diciembre-Mayo 2025), p. 195-207.

Publicado por: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

RESUMEN

El valor público en la sociedad actual depende de la interacción entre instituciones inclusivas y un Estado emprendedor, donde las primeras aseguran la participación ciudadana y la transparencia para legitimar las políticas públicas. En esta dinámica, el Estado emprendedor invierte en innovación y desarrollo sostenible para impulsar el crecimiento económico. Su colaboración, que se manifiesta en cadenas de valor público que promueven la cohesión social y confianza institucional, debe superar barreras burocráticas y fomentar una cultura de innovación, participación ciudadana y transparencia.

Palabras clave: Cadenas de valor público, Estado emprendedor, Innovación, Instituciones inclusivas, Valor público

Maximiliano Campos Ríos (2025). Catalizadores del bienestar social. Instituciones inclusivas y Estado emprendedor en la generación de valor público. Revista de Economía Política de Buenos Aires, 30(19), 195-207. [https://doi.org/10.56503/repba.Nro.30\(2025\)/3280](https://doi.org/10.56503/repba.Nro.30(2025)/3280)



La revista opera bajo licencia Creative Commons:
Atribución-NoComercial-SinDerivadas CC BY-NC-ND (CC BY-NC-ND 4.0). Es una publicación gratuita sostenida por la Facultad de Ciencias Económicas y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires que protege los derechos intelectuales de sus miembros.

CATALIZADORES DEL BIENESTAR SOCIAL. INSTITUCIONES INCLUSIVAS Y ESTADO EMPRENDEDOR EN LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO

CATALYSTS OF SOCIAL WELFARE. INCLUSIVE INSTITUTIONS AND THE ENTREPRENEURIAL STATE IN THE GENERATION OF PUBLIC VALUE

Recibido 28/04/2025. Aceptado 08/05/2025.

Maximiliano Campos Ríos*

<https://orcid.org/0009-0004-5683-3623>

RESUMEN

El valor público en la sociedad actual depende de la interacción entre instituciones inclusivas y un Estado emprendedor, donde las primeras aseguran la participación ciudadana y la transparencia para legitimar las políticas públicas. En esta dinámica, el Estado emprendedor invierte en innovación y desarrollo sostenible para impulsar el crecimiento económico. Su colaboración, que se manifiesta en cadenas de valor público que promueven la cohesión social y confianza institucional, debe superar barreras burocráticas y fomentar una cultura de innovación, participación ciudadana y transparencia.

Palabras clave: Cadenas de valor público, Estado emprendedor, Innovación, Instituciones inclusivas, Valor público

ABSTRACT

Public value in today's society depends on the interaction between inclusive institutions and an entrepreneurial state, where the former ensures citizen participation and transparency to legitimize public policies. In this dynamic, the entrepreneurial State invests in innovation and sustainable development to drive economic growth. Its collaboration, which manifests itself in public value chains that promote social cohesion and institutional trust, must overcome bureaucratic barriers and foster a culture of innovation, citizen participation and transparency.

Keywords: Entrepreneurial state, Inclusive institutions, Innovation, Public value, Public value chains

* Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. - maximilianocampos@gmail.com

Códigos JEL: H11

I. Introducción

En el intrincado entramado del desarrollo económico y el bienestar social contemporáneo, el valor público aparece intrínsecamente ligado a la prosperidad y la cohesión social, porque se nutre de la interacción dinámica entre las instituciones inclusivas y un Estado emprendedor, catalizadores esenciales en su generación. Como señalan Acemoglu y Robinson (2013), las instituciones inclusivas, caracterizadas por su capacidad para fomentar la participación amplia y equitativa en la vida económica y política, sientan las bases para un desarrollo sostenible y una prosperidad compartida.

Este trabajo analiza la sinergia entre las instituciones inclusivas y un Estado activo en la generación de valor público, a partir de la consideración de su impacto en las cadenas de valor público. La pregunta que lo guía es cómo incide la interacción entre instituciones inclusivas y un Estado emprendedor en la generación de valor público, particularmente en términos de innovación, cohesión social y distribución equitativa de oportunidades. En este marco, la hipótesis que se sostiene es que la interacción entre instituciones inclusivas y un Estado emprendedor genera valor público ampliado, manifestado en innovación tecnológica, cohesión social y distribución equitativa de oportunidades, siempre que se superen barreras burocráticas y se fortalezcan mecanismos de participación ciudadana en las cadenas de valor público.

La articulación de estos elementos puede potenciar el desarrollo económico, la cohesión social y la consolidación democrática, dado que un Estado activo o emprendedor (Mazzucato, 2022) que es capaz de asumir riesgos e invertir en áreas estratégicas como tecnología, salud y educación, requiere de instituciones inclusivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. De esta manera, es posible evitar la captura de beneficios por parte de élites y promover una distribución equitativa de las oportunidades.

En este contexto, desde un enfoque ensayístico se aborda cómo las instituciones inclusivas, al promover sistemas políticos y económicos que distribuyen el poder y las oportunidades de manera equitativa, contribuyen a la generación de valor público al facilitar procesos participativos y asegurar la legitimidad de las políticas. Se analiza, además, el papel de las

cadenas de valor público como mecanismos para integrar insumos sociales diversos y enriquecer el diagnóstico y la definición de prioridades en las políticas públicas, para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos y contribuir a la generación de valor público ampliado.

Finalmente, se adentra en el rol del Estado emprendedor (Mazzucato, 2022), que redefine el papel estatal no como un mero regulador, sino como un actor central en la creación de mercados y valor público a través de inversiones transformadoras. Con ello, se mira cómo la complementariedad entre el Estado emprendedor y las instituciones inclusivas se traduce en un proceso sistémico donde el primero impulsa la inversión y la innovación, mientras las segundas garantizan que incorporen insumos sociales diversos y promuevan la participación, con fortalecimiento de la cohesión social, la confianza institucional y el empoderamiento ciudadano.

II. Metodología

La elección del enfoque ensayístico para este trabajo se justifica por su idoneidad para articular reflexiones teóricas y análisis crítico en torno a la relación entre instituciones inclusivas y Estado emprendedor en la generación de valor público. El formato del ensayo permite contrastar y sintetizar marcos conceptuales provenientes de la economía institucional, la sociología política y los estudios de gestión pública, con aportes de Acemoglu y Robinson sobre instituciones inclusivas y de Mazzucato respecto al Estado emprendedor. Esta modalidad facilita el desarrollo de argumentaciones fundamentadas, la elaboración de juicios críticos y la incorporación de perspectivas multidisciplinares, sin la necesidad de agotar empíricamente el fenómeno, sino más bien priorizando la profundidad conceptual y analítica. Además, el ensayo posibilita una subjetividad fundamentada, en la que la selección y jerarquización de conceptos clave, como cadenas de valor público y cohesión social, se orienta por el rigor argumentativo.

En cuanto a los criterios de selección de ejemplos, se optó por casos que resultan relevantes para ilustrar la interacción conceptual entre Estado e instituciones inclusivas y que permiten verificar la hipótesis central del trabajo. Se priorizó la diversidad geográfica, incluyendo experiencias de América Latina y de otros contextos globales, con el fin de evitar sesgos

regionales y aportar una visión comparativa. Asimismo, se buscó la representatividad institucional a partir de la selección de ejemplos en los que intervienen distintos niveles de gobierno, organismos multilaterales y redes ciudadanas, para mostrar la aplicabilidad de los conceptos en diferentes escalas y ámbitos de gestión. Los diversos casos de Argentina en múltiples áreas y lugares, sumados a las experiencias internacionales de Costa Rica, Brasil y Estonia, permiten analizar sinergias operativas entre actores públicos, privados y comunitarios, aportan evidencia sobre la generación de valor público en términos de innovación, cohesión social y equidad, y habilitan el análisis comparativo de modelos de gobernanza. De este modo, la metodología combina el rigor documental y la flexibilidad argumentativa del ensayo, de manera que genera un marco adecuado para explorar relaciones complejas entre variables institucionales y sus efectos sobre el valor público.

III. Instituciones inclusivas, motores del desarrollo económico y de la creación de valor público

Como explican Acemoglu y Robinson (2013), las instituciones inclusivas son aquellas estructuras políticas, económicas y sociales que fomentan la participación amplia y equitativa de la población en la vida económica y política, porque generan un entorno propicio para el desarrollo y la prosperidad sostenida. La importancia de estas instituciones radica en que se caracterizan por distribuir el poder de manera que evitan la concentración en manos de una élite, garantizan la protección de los derechos de propiedad, promueven la competencia abierta y facilitan la igualdad de oportunidades para que todos los individuos puedan desarrollar su potencial productivo y creativo. Para hacer eso posible, crean incentivos para la innovación y la inversión, al ofrecer seguridad jurídica y un marco normativo que protege a los actores económicos de expropiaciones arbitrarias o abusos de poder. Además, aseguran mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que limitan la corrupción y el abuso, y que fortalecen así la legitimidad del Estado y la confianza social. Por el contrario, las instituciones extractivas concentran el poder y los recursos en manos de una minoría que utiliza el aparato estatal para extraer rentas y bloquear la

competencia, situación que genera desigualdad, estancamiento económico y exclusión social.

Acemoglu y Robinson (2013) subrayan que el desarrollo económico sostenible y la prosperidad dependen fundamentalmente de la calidad de las instituciones inclusivas, más allá de factores como la geografía, la cultura o los recursos naturales. En su análisis, distinguen entre instituciones políticas inclusivas, que aseguran la pluralidad y la participación democrática, e instituciones económicas inclusivas, que garantizan un mercado competitivo y el acceso equitativo a recursos y oportunidades, pero lo fundamental es la interacción positiva entre ambas para que un país pueda evitar la captura del poder por élites extractivas y fomentar un crecimiento económico dinámico y equitativo.

Por sus características, las instituciones inclusivas ocupan un lugar decisivo en la generación de valor público, ya que facilitan procesos participativos y aseguran la legitimidad de las políticas, además de promover servicios públicos alineados con las necesidades reales de la ciudadanía. Vale recordar que el valor público, como lo define Moore (1998), es aquel creado por las organizaciones del sector público a través de sus servicios, leyes, regulaciones y otras acciones que son autorizadas, acordadas y valoradas por la sociedad. El autor plantea que el objetivo fundamental de la gestión pública es incrementar este valor público, entendiendo que se trata de aquello que la ciudadanía colectivamente considera valioso y prioritario para el bienestar social, por lo que es decisiva la interacción entre el Estado y sus ciudadanos. Con ello se aprecia que no es un concepto estático ni unívoco, sino que está sujeto a negociación política y social, y depende del contexto y las expectativas ciudadanas. Además, el valor público implica no solo resultados tangibles, sino también la legitimidad, la confianza y la cohesión social que generan las instituciones públicas al cumplir con sus mandatos de manera transparente y responsable.

En este escenario, las instituciones inclusivas abonan la generación de valor público al promover sistemas políticos y económicos que distribuyen el poder y las oportunidades de manera equitativa, y que garantizan la participación amplia y efectiva de la sociedad. Se trata de un marco institucional que permite que las políticas públicas y los servicios estatales

no solo sean técnicamente eficientes, sino también legítimos y sostenibles, ya que el valor público se traduce en bienestar social, cohesión y confianza en las instituciones.

En cuanto a las cadenas de valor público, el aporte diferencial que hacen las instituciones inclusivas es que las potencian al integrar insumos sociales diversos y enriquecer el diagnóstico y la definición de prioridades en las políticas públicas. Vale recordar que la cadena de valor público es un modelo que describe el conjunto de actividades interrelacionadas que realizan las instituciones públicas para generar valor público, entendido como los beneficios colectivos que mejoran el bienestar social y fortalecen la legitimidad del Estado (Campos Ríos, 2023). Así, las instituciones inclusivas fortalecen la legitimidad y pertinencia de las intervenciones estatales, porque facilitan procesos participativos y adaptativos en el diseño y producción de servicios que responden a la diversidad cultural, social y económica. Además, trabajan para garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos a través de la eliminación de barreras físicas, económicas y sociales, lo que amplía la cobertura y mejora la calidad percibida por la ciudadanía.

Este enfoque integral contribuye a la generación de valor público ampliado, que no solo se mide en términos económicos o técnicos, sino también en el fortalecimiento de la cohesión social, la confianza en el Estado y el empoderamiento ciudadano. En contextos como el argentino, programas que articulan sectores público, privado, académico y comunitario para integrar a diversos grupos en cadenas productivas ilustran cómo las instituciones inclusivas operan para transformar insumos sociales y técnicos en resultados concretos que generan empleo y participación.

IV. El Estado como actor central en la creación de valor público

La sinergia estratégica entre valor, equidad y gobernanza participativa deja ver que es decisivo el rol que desempeña el Estado en esta dinámica. Mazzucato (2022) redefine el papel del Estado al plantearlo no como un mero regulador o corrector de fallas de mercado, sino como un actor central en la creación de mercados y valor público mediante inversiones transformadoras en áreas críticas como tecnología, salud, energía y educación.

Este enfoque, sin embargo, adquiere profundidad y legitimidad cuando se articula con instituciones inclusivas que garantizan que los procesos de creación de valor no repliquen desigualdades, sino que redistribuyan oportunidades y beneficios de manera equitativa. El Estado emprendedor, según Mazzucato (2022), opera bajo una lógica de inversión pública de alto riesgo y asume roles que el sector privado evita por su incertidumbre financiera. Ejemplos históricos como el desarrollo de internet, el sistema de posicionamiento global (GPS, por su sigla en inglés) o las vacunas de ARN mensajero contra el COVID-19 — todos financiados inicialmente por agencias estatales — ilustran cómo el Estado puede catalizar innovaciones disruptivas. No obstante, Mazzucato (2022) critica que los beneficios de estas inversiones suelen privatizarse, mientras los costos y riesgos se socializan y, para contrarrestarlo, propone mecanismos como cláusulas de retorno en contratos públicos que permitan reinvertir ganancias en nuevos proyectos de interés colectivo.

Aquí es donde se realiza la complementariedad entre el Estado emprendedor y las instituciones inclusivas, dado que el primero puede desplegar su capacidad innovadora y de liderazgo solo en contextos donde las instituciones inclusivas aseguran que los beneficios de la innovación se distribuyan de manera justa y que la participación ciudadana sea real y efectiva.

En las cadenas de valor público, esta relación se traduce en un proceso sistémico donde el Estado emprendedor impulsa la inversión, la coordinación y la innovación tecnológica, mientras las instituciones inclusivas garantizan que estos procesos incorporen insumos sociales diversos y promuevan la participación. Así, las cadenas de valor público además de generar productos y servicios eficientes también fortalecen la cohesión social, la confianza institucional y el empoderamiento ciudadano a través de la ampliación del valor público más allá de lo económico.

En este marco, el concepto de valor público influye en la planificación de la gestión pública y plantea la necesidad de repensar la responsabilidad social del Estado. Como explica Aboslaiman (2022), el sector público necesita adoptar el enfoque de valor público compartido, originalmente desarrollado en el ámbito privado, para generar políticas y acciones que beneficien a la sociedad de manera ética, estratégica y colaborativa. De

esta forma, es posible que el Estado cree valor público real, especialmente a través de la participación ciudadana, la innovación y la colaboración entre distintos actores sociales. Así, la gobernanza, en tanto proceso que integra a gobiernos, sociedad civil e instituciones para mejorar la eficacia de las políticas públicas, destaca la importancia de la generación de valor público mediante la reducción de conflictos y la participación ciudadana (Ramos García, 2024). Ello es así porque una gobernanza efectiva requiere redes colaborativas y adaptabilidad a contextos complejos y dinámicos.

La visión de Mazzucato (2022) enfatiza que el Estado debe asumir riesgos y liderar en todas las fases de la innovación, desde la investigación básica hasta la transferencia tecnológica, lo cual requiere instituciones inclusivas que aseguren transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación para evitar la captura y garantizar que los beneficios se socialicen. Esto es fundamental para legitimar la acción estatal emprendedora y para que las cadenas de valor público funcionen de manera equitativa y sostenible, para que permitan crear un ecosistema donde la innovación pública y la inclusión social se potencien mutuamente con un valor público ampliado que impulse el desarrollo económico y la consolidación democrática.

En el contexto de las cadenas de valor público, esta colaboración se materializa en procesos de cocreación con actores diversos. Por ejemplo, en programas como las Cadenas de Valor Inclusivas en Rafaela, provincia de Santa Fe (Parra et al., 2020), el Estado no solo invierte en infraestructura textil, sino que articula a cooperativas, pequeñas y medianas empresas (pymes), universidades y organizaciones de mujeres para diseñar políticas que generen empleo y fortalezcan derechos sociales. Las instituciones inclusivas, en este marco, actúan como mediadoras que traducen la innovación en beneficios tangibles para la sociedad, con la eliminación de barreras estructurales —como la falta de acceso a créditos o capacitación— y el fomento a la participación en sectores estratégicos.

En cuanto a la vinculación entre el sector científico y el productivo, con promoción de la inversión privada y la accesibilidad a datos para mejorar la gestión y la toma de decisiones en ciencia y tecnología, se destaca el ejemplo de las incubadoras universitarias, como la de la Universidad

Nacional de Córdoba (UNC). La Incubadora de Empresas de la UNC ofrece espacios inclusivos para que emprendedores científicos puedan validar sus ideas, acceder a servicios especializados y financiamiento, y participar en actividades de formación y vinculación para reducir las barreras de entrada y fortalecer el ecosistema emprendedor. Entre los proyectos impulsados se encuentra Fonics, un audiómetro que funciona mediante una computadora personal y cuenta con un asistente inteligente para facilitar diagnósticos más seguros y confiables; es ultraportátil y permite realizar estudios auditivos más rápidos que los equipos tradicionales. Otro proyecto es GeoBlock, un componente constructivo sustentable para cerramientos verticales y revestimiento de muros, elaborado principalmente con escombros urbanos y desechos de construcción, que reduce la contaminación y aporta diseño estético a los espacios habitables. También destaca Eflux, un sistema de tratamiento de efluentes industriales, especialmente para la industria láctea y de bebidas, que busca generar productos de alto valor agregado a partir de esos desechos mediante procesos biológicos de bajo costo. En cuanto a Cittyo, se trata de una cerradura inteligente que reemplaza la llave tradicional por una aplicación móvil con conexión Bluetooth y permite controlar accesos de forma remota y programada. Por último, Dis+Adaptaciones desarrolla tecnología asistiva y productos personalizados de bajo costo para personas con discapacidad, con utilización de diseño CAD, impresión 3D y software especializado (Comercio y Justicia, 2019).

En Argentina, la existencia de fondos fiduciarios y aceleradoras especializadas ha sido clave para superar las históricas limitaciones de financiamiento que enfrentan los emprendimientos de base científico-tecnológica, especialmente en el sector de la biotecnología. Un ejemplo destacado es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), creado en 2017, que actúa como un fondo de fondos y ha apoyado a la mayoría de las aceleradoras científicas vinculadas al crecimiento de *startups* biotecnológicas. Ello se ve en el caso de la aceleradora Grid Exponential, seleccionada dentro del FONDCE, que ha acelerado varias empresas biotecnológicas, entre ellas BeeFlow, que desarrolla servicios innovadores de polinización para mejorar el rendimiento agrícola utilizando abejas. Bee-

flow ya opera en Estados Unidos y se prepara para una nueva ronda de financiamiento, lo que ejemplifica cómo el apoyo estatal y privado permite a emprendimientos locales alcanzar mercados internacionales (Gonzalo et al., 2023).

Diversos ejemplos de emprendimientos argentinos de base científico-tecnológica reflejan un claro rol activo y estratégico del Estado como emprendedor y creador de valor público. Se trata de proyectos que recibieron apoyo estatal en sus fases tempranas de desarrollo a través de capacitaciones, asesoramiento y espacios de vinculación que buscaron, además de potenciar sus modelos de negocio, facilitar la transferencia tecnológica y la innovación con impacto social y económico. Entre los emprendimientos se encuentran PLAMIC, una plataforma microfluídica para fabricar nanomedicinas para el tratamiento del cáncer, que evalúa la respuesta de pacientes oncológicos a distintos tratamientos y facilita la medicina personalizada al reducir los efectos secundarios y dirigir el tratamiento a tejidos específicos. Otros ejemplos son el de WhiteCoat iTech, un dispositivo médico que captura signos vitales en tiempo real y los sube a la nube para seguimiento remoto, y el de Oncovotech, un equipo para evaluar la efectividad de tratamientos oncológicos usando membrana de embrión de pollo. Por su parte, BIOPEM Mag es un método para extraer RNA viral con nanopartículas magnéticas para diagnóstico de COVID-19 y otras enfermedades, mientras que Immunalgia Therapeutics desarrolla un tratamiento para dolor crónico basado en pequeñas fracciones de ADN. En cuanto a Infira, ofrece soluciones biotecnológicas para prolongar el ciclo de vida y productividad de plantas, al tiempo que Jejy'a elabora pulpa de frutos de palmera enriquecida con probióticos para mejorar valor nutricional y rentabilidad (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2021).

A nivel internacional, un ejemplo paradigmático se observa en Costa Rica, donde el Estado emprendedor impulsó una matriz eléctrica 100% renovable mediante alianzas público-privadas, mientras las instituciones inclusivas —como comités locales de energía— aseguraron que las comunidades rurales accedieran a electricidad limpia y empleos en mantenimiento de infraestructura (CAF, 2025). Este caso demuestra cómo la combinación de audacia estatal y gobernanza participativa puede generar

valor público ampliado: se avanza tanto en sostenibilidad ambiental, como en reducción de la pobreza energética y se fortalece la cohesión social.

La integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el *big data* en las cadenas de valor público ofrece otro ámbito de sinergia. Por un lado, el Estado emprendedor puede usar estas herramientas para optimizar servicios, como en el Sistema Nacional de Empleo (SINE) de Brasil, donde algoritmos vinculan postulantes con vacantes laborales (Bruno et al., 2021), mientras que, por otro lado, las instituciones inclusivas deben garantizar que estas tecnologías no perpetúen sesgos o exclusiones. Por ejemplo, en Estonia, el gobierno combinó inversión estatal en digitalización con programas de alfabetización digital para adultos mayores y zonas rurales, asegurando que la innovación no dejara a nadie atrás (Vitureau, 2023).

Esos ejemplos muestran que la existencia de un Estado emprendedor con instituciones inclusivas redefine la creación de valor público como un proceso estratégico, participativo y redistributivo. Un Estado que invierte audazmente en el futuro, mientras que las instituciones inclusivas aseguran que ese futuro sea equitativo y legítimo, forman un ecosistema donde no solo se genera crecimiento económico, sino también sociedades más resilientes y justas.

V. Conclusiones

La generación de valor público en la sociedad contemporánea es un proceso complejo y multifacético, cuyo éxito depende de la interacción sinérgica entre instituciones inclusivas y un Estado emprendedor. En esta tríada virtuosa, las instituciones inclusivas, al garantizar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, proporcionan el marco necesario para que las políticas públicas sean legítimas, equitativas y sostenibles. A su vez, el Estado emprendedor, asume riesgos e invierte en áreas estratégicas como la innovación, la tecnología y el desarrollo sostenible, aspecto que impulsa el crecimiento económico y la creación de valor público a largo plazo.

La complementariedad entre ambos actores se manifiesta en las cadenas de valor público, donde el Estado emprendedor moviliza recursos e impulsa la innovación, mientras que las instituciones inclusivas aseguran

que estos procesos sean participativos, equitativos y respondan a las necesidades de la ciudadanía. Esta colaboración estratégica se traduce en la generación de un valor público ampliado, que no solo se mide en términos económicos, sino también en el fortalecimiento de la cohesión social, la confianza institucional y el empoderamiento ciudadano.

Sin embargo, se debe reconocer que la mera existencia de instituciones inclusivas y un Estado emprendedor no garantiza automáticamente la generación de valor público y es preciso que estos actores operen de manera coordinada y estratégica, con el objetivo de superar las barreras burocráticas, la captura de élites y la resistencia al cambio. Asimismo, es fundamental que se promueva una cultura de innovación y colaboración, donde se fomente la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido, la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el *big data* puede potenciar la generación de valor público, siempre y cuando se implementen de manera ética y responsable, con garantía de la protección de los derechos individuales y la equidad en el acceso a los servicios públicos. Para ello, es necesario que las instituciones inclusivas desempeñen un papel activo en la regulación y supervisión de estas tecnologías, de manera que se eviten la existencia de sesgos y desigualdades.

En definitiva, la generación de valor público en el siglo XXI requiere de un enfoque holístico e integrado, donde las instituciones inclusivas y el Estado emprendedor trabajen de manera coordinada y estratégica para promover el desarrollo económico, la cohesión social y la consolidación democrática. Solo así será posible construir sociedades más prósperas, equitativas y resilientes, donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de desarrollar su potencial y contribuir al bienestar común.

VI. Referencias bibliográficas

- Aboslaiman, L. (2022). Planificación y responsabilidad social en la creación del valor público. *Anuario del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales*, 20, 124-138.
- Acemoglu, D. y Robinson, J. (2013). *Por qué fracasan los países*. Ariel.
- Bruno, F., Cardoso, P. y Faltay, P. (2021). *BRASIL Sistema Nacional de Empleo y la gestión automatizada de la desocupación laboral*. MediaLab Universidad Federal de Río de Janeiro, Red LAVITS y Derechos Digitales.
- CAF-Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (4 de febrero de 2025). *Costa Rica lidera la transición energética en América Latina con una matriz eléctrica casi 100% renovable*. <https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/costa-rica-lidera-la-transicion-energetica-en-america-latina-con-una-matriz-electrica-casi-100-renovable/>
- Campos Ríos, M. (2023). *Cadena de valor público y ecosistema digital*. SELA.
- Comercio y Justicia (25 de febrero de 2019). *La Incubadora de Empresas de la UNC recibió nuevos proyectos tecnológicos*. <https://comercioyjusticia.info/negocios/la-incubadora-de-empresas-de-la-unc-recibio-nuevos-proyectos-tecnologicos/>
- Gonzalo, M., O'Farrell, J. y Mendoza, F. (2023). *Financiamiento de start-ups agrobiotecnológicas en Argentina. Avances, dilemas e iniciativas de política*. Fundar.
- Mazzucato, M. (2022). *El Estado emprendedor. Mitos en la oposición público vs. privado*. Taurus.
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (28 de diciembre de 2021). *14 emprendimientos de base científico-tecnológica finalizaron un ciclo de fortalecimiento de capacidades*. <https://www.argentina.gob.ar/noticias/14-emprendimientos-de-base-cientifico-tecnologica-finalizaron-un-ciclo-de-fortalecimiento>
- Moore, M. H. (1998). *Gestión estratégica y creación de valor en el sector público*. Paidós.
- Parra, J., Lencioni, L., Menardi, M. y Alexandroff Zlateff, A. (2020). *Bitácora, cuadernos de políticas de desarrollo territorial: Economía social y solidaria: la primera experiencia del Programa Cadenas de Valor Inclusivas en la ciudad de Rafaela*. OREJA DE NEGRA. Municipalidad de Rafaela e Instituto PRAXIS (UTN-FRRa).
- Ramos García, J. M. (2024). Gobernanza: Marco conceptual, valor público y fronteras comparadas. En M. R. Barajas Escamilla y S. A. Sandoval Godoy (Coords.), *Fronteras en movimiento. Perspectivas analíticas y retos epistemológicos al inicio del siglo XXI* (pp 189-227). Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.
- Vitureau, M. (2023). Estonia, pionera en el uso de la tecnología digital. *El Correo de la UNESCO*, 4, 20-21.
-